

CRONICA DEL MES

Septiembre - Octubre/79.

Este largo período de los meses de septiembre y octubre estarán divididos en dos partes, la primera de incremento de la conflictividad hasta irrumpir en la insurrección militar del 15 de octubre, y la segunda parte desde esa fecha hasta la finalización del mes.

El deterioro de la situación nacional, como hemos podido apreciar en estas crónicas a lo largo de todo el año, se ha ido agudizando hasta ponernos al borde de la guerra civil y de la insurrección popular, cuyo proceso casi incontenible fue cortado bruscamente por los sucesos del 15 de octubre.

La violencia institucionalizada ya prescindió del más mínimo pudor, y se dedicó a eliminar sistemáticamente a todo lo que le hiciera oposición. Cuatro campesinos de Metalío, secuestrados de sus casas, fueron estrangulados y abandonados en la carretera del Litoral. En el río Paz apareció el cadáver de otro, partido en dos por el tórax. En Zacatecoluca apareció otro cadáver sin cabeza. En Santa Tecla fue asesinado el profesor Miguel Flores Joya, dirigente de ANDES, que ya había sido perseguido anteriormente. Un grupo de jóvenes del MERS fueron emboscados, parece que por la Guardia Nacional, cuando iban a la playa del Cuco, muriendo siete en el acto, y quedando heridos otros siete. Tres miembros del BPR fueron ajusticiados, y sus cadáveres arrojados frente al Seguro Social. La manifestación del BPR organizada el 14 de septiembre fue disuelta en su misma organización; por lo menos 4 personas murieron en esa represión. Tres jóvenes que pasaban por las cercanías de la Casa Presidencial fueron ametrallados por los Cuerpos de Seguridad, con el agravante de que eran de nacionalidad norteamericana; también una señora que pa-

saba por una gasolinera fue muerta por dichos Cuerpos; en ambos casos la versión oficial fue de enfrentamientos con guerrilleros, que no pudo ser sostenida ante las evidencias posteriores. Unas bombas de propaganda explotadas por LP 28 en el centro de la capital desataron un tiroteo de los Cuerpos de Seguridad, que dejaron por lo menos cuatro peatones muertos, aparte de los heridos. Por todas partes de la República iban siendo arrojados de carros cadáveres con señales de tortura: 8 aparecieron en la carretera del Litoral, 2 en Usulután, y otros dos en Zacatecoluca. Pero el asesinato más deplorable fue el cometido contra cuatro dirigentes máximos de FTC, campesinos, de gran liderazgo, a quienes siguieron y frente al cuartel de Caballería detuvieron y ejecutaron, ofreciendo nuevamente la versión oficial de que habían muerto en un enfrentamiento al intentar tomarse el cuartel. Pero la indignación popular y las investigaciones posteriores esclarecieron que se había tratado de un vil asesinato. La vida en el país estaba en permanente amenaza, y no existía la menor garantía de parte de las instituciones que deberían velar por ella. Si a estas muertes se añaden las represiones a las huelgas, las capturas de sus dirigentes y activistas, el cierre definitivo de fábricas con el consiguiente aumento del desempleo, y el proyecto de reforma al Código de Trabajo en el sentido de anular los contratos colectivos pactados bajo medidas de fuerza, se puede tener una idea de la temperatura que iba adquiriendo la vida nacional en un tal sistema de represión institucional.

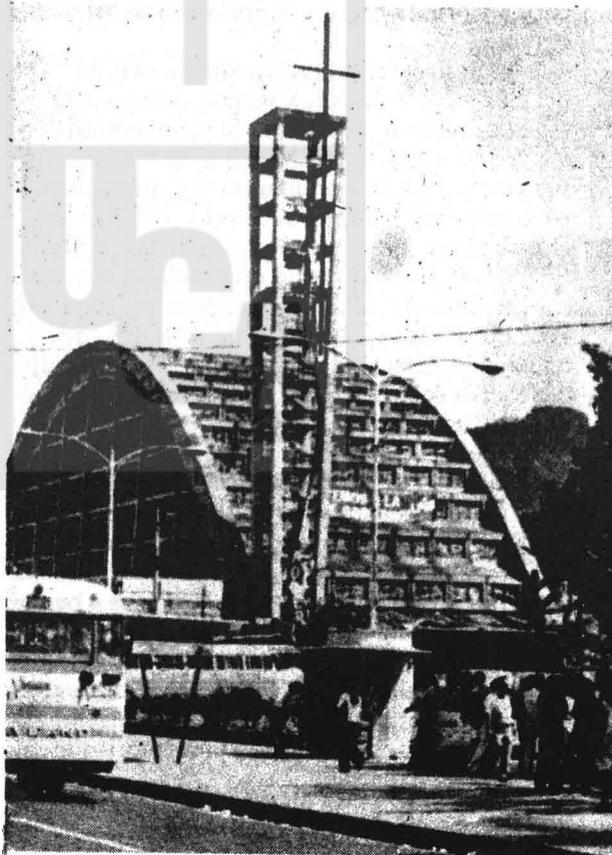
Hasta tal punto llegó la situación que las autoridades de los Estados Unidos cursaron un aviso a sus ciudadanos en el sentido de que a El Salvador se viajaba bajo riesgo, y que se reduje-

ran los viajes a los indispensables, lo cual despertó un clamor de quejas en sectores públicos nacionales. Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos publicó un pronunciamiento en el que condena la situación, presenta el temor de los jueces en cumplir su función, y denuncia la falta de respaldo legal de la Corte Suprema y de las Cámaras para el cumplimiento del derecho de "habeas corpus", lo que las convierte en cómplices de impunidad en la violación a la ley.

Frente a tal represión del Estado, es lógico que los grupos guerrilleros de izquierda intensificaran sus acciones, en parte como respuesta, y en parte también para hacer sentir su fuerza y herir sentimientos importantes. En este sentido, tal vez, se puede interpretar el asesinato, de parte de las FPL, en su casa de Apopa, del profesor José Javier Romero Mena, hermano del Presidente Romero; hecho que, a su vez, pudo haber intensificado la represión vengativa del régimen. Días después fueron emboscados unos Policías, camino de San Marcos, y murieron tres de ellos, dándose otro por desaparecido, y siendo incendiado un radiopatrulla. A los pocos días apareció en los diarios una esquela mortuoria de cinco policías asesinados en esa y en otras acciones terroristas. Las FPL y los otros grupos guerrilleros continuaron sus acciones, con una serie de hostigamientos a patrullas militares y a comandantes cantonales, que eran miembros de ORDEN. Hubo varios ataques incluso a puestos de la Guardia Nacional, y fueron asesinados varios Guardias y un suboficial de ORDEN. La casa del Fiscal General de la República sufrió un atentado, sin mayores consecuencias, y más bien como un aviso. En Santa Tecla fue asesinado un agente municipal, y también resultó muerto un vigilante, parece que a consecuencia del derrumbe de un edificio en el que se detonó una bomba. El último hecho importante fue el secuestro de Luis Escalante Arce, uno de los principales banqueros del país, en su misma residencia, y tras un breve enfrentamiento en el que dio muerte a uno de los secuestradores e hirió a otro, pero él, a su vez, recibió una herida en las piernas, que hicieron temer por su vida. En los primeros días de noviembre sería liberado, y las FPL se adjudicarían el hecho.

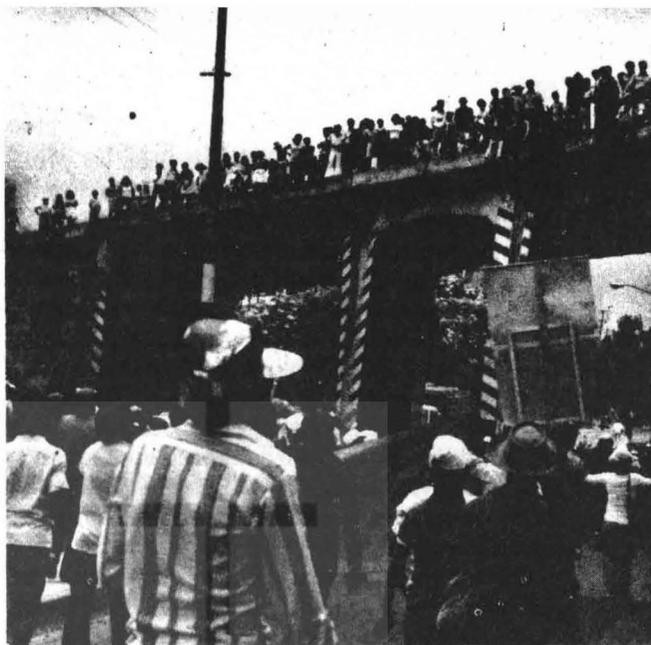
Por su parte, las organizaciones populares intensificaron sus acciones, dentro siempre de sus patrones de comportamiento de lucha: manifestaciones, quemas de buses y llantas, tomas de

edificios y emisoras, y actos similares. Al comienzo del mes, miembros del BPR incendiaron las oficinas de la hacienda Talcualuya, propiedad del ISTA. A lo largo de todo el período fueron frecuentes las quemas de buses y de llantas por distintos puntos de la capital, e incluso en el interior del país, lo que daba lugar a la interrupción del servicio de buses, que se agravó en la segunda semana de septiembre con el rumor del cierre de las gasolineras, cosa que no tuvo efecto. Ya en el mes de octubre el BPR, y el FAPU quemaron buses y vehículos en San Salvador, Santa Ana y Usulután, incendiaron una tienda de ADOC, la fábrica IMES, y varias comandancias, alcaldías y juzgados de paz; llegaron a quemar llantas frente a la embajada americana, y se tomaron 4 radio-emisoras para transmitir mensajes. Las LP 28, a su vez, ocuparon el Ministerio de Trabajo a finales de septiembre. Las huelgas laborales se incrementaron, multiplicándose las tomas de fábricas, en varias de ellas con rehenes de la parte patronal o gerencial. Grupos de jóvenes se dedicaron a una tarea de agitación y propaganda en varios centros de segunda enseñanza. Por todo el país se iban tomando iglesias como lugar de refugio y de propaganda.



El período fue también pródigo en manifestaciones. En la primera semana de septiembre se realizó una integrada por mujeres del BPR, y otra de miembros de ANDES, acompañadas ambas de mítines y pintadas de edificios y vehículos. Durante la semana que precedió al 15 de septiembre las organizaciones populares promovieron manifestaciones en las que trataban de dar su sentido e interpretación a la Independencia; la primera de ellas, organizada por el FAPU, se desarrolló sin problemas; pero la del 14 de septiembre, convocada por el BPR fue disuelta antes de organizarse, al ser agredida con disparos por personas fuertemente armadas que se conducían en carros, y por francotiradores apostados, según los testigos entre los que se hallaban varios periodistas extranjeros, en el edificio en que se encuentra la Dirección General de Tránsito y en el antiguo hospital Bloom. En la última semana del mes, sin embargo, una manifestación organizada por el BPR se desarrolló sin mayores problemas. Pero la manifestación más imponente fue la tenida al comienzo del mes de octubre, con motivo del entierro de los cuatro dirigentes campesinos de FTC asesinados frente al cuartel de la Caballería, en la que se dieron cita, por primera vez, además de los campesinos y miembros del BPR, todas las organizaciones populares y frentes opositores.

En medio de tales tensiones y conflictos, sin embargo, dos acontecimientos de suma importancia iban a tener lugar. El BPR tuvo su III Congreso Nacional, en un local de la Universidad Nacional. Allí se redefinió su estrategia, y se renovaron los cuadros de la alta dirigencia, dándole mayor peso a los representantes obreros, cuando antes predominaban los mandos campesinos. La nueva orientación parece estar más acorde con la ortodoxia, y da indicios de una preparación para la revolución popular, que, sin embargo, todavía no está madura, en opinión del BPR, contra la consigna de FAPU y LP 28 que proclaman ya "insurrección es la solución", y parecen tratar de propiciarla. El otro acontecimiento bien dado por la publicación de la **Plataforma**: documento de acuerdo mínimo suscrito por 14 agrupaciones, entre las que se encuentran los partidos de la oposición, los sindicatos más importantes, incluidos los controlados por el FAPU —aunque esta organización no tomó parte formal—, y por las LP 28, que al final no la suscribieron, aunque habían participado en su elaboración. Esta Plataforma presentaba las



condiciones indispensables para un cambio en el proceso nacional y para una salida a la situación insostenible, a la vez que se convertía en una alianza múltiple y con bastante base, lo que podía aglutinar a otras fuerzas y configurar una alternativa al régimen de Romero. En dos apariciones públicas en TV presentaron sus puntos de vista, analizaron la situación, y denunciaron la represión, incluso con el testimonio de un sobreviviente de un asesinato múltiple de parte de la Guardia en varios ciudadanos humildes que fueron macheteados y arrojados al mar desde un acantilado.

Absorbida la atención nacional por tal conflictividad, la vida administrativa del gobierno pasaba desapercibida, fenómeno agravado por el desconocimiento de una administración totalmente incolora e intrascendente, y por un repudio cada día más generalizado al régimen. Los Ministros siguieron presentando sus informes a la Asamblea Legislativa, sin que lograran despertar la atención del pueblo. Un representante del PPS propuso en la Asamblea que se congelaran los impuestos, debido a la inflación, y se interpretó como un intento de detener el alza que se esperaba a la exportación del café. Entre tanto, y sorpresivamente, el precio de la gasolina se elevó un 27%, índice superior al encarecimiento del crudo en el mercado mundial, lo que vino a agravar la situación económica de las mayorías que verían elevados todos los productos con la excusa del aumento a la gasolina. Se tuvo un Consejo de Ministros, cosa sumamente rara en el gobierno de Romero, y el Presidente ofreció los resultados del Foro Nacional e insistió en el

proceso democratizador del país y de las próximas elecciones, y parece que no convenció ni al mismo gobierno, dado el escaso eco que tuvo en los medios informativos. Días antes había tenido lugar una concentración del PCN, al que se le había quitado toda participación en la vida política nacional. La tensión nacional, y la represión del día anterior, obligaron al gobierno a suspender todos los actos oficiales del día 15 de septiembre, en parte para evitar provocaciones, y en parte también por miedo a la reacción popular, y así transcurrió ese día, por primera vez en la historia, sin celebraciones públicas del gobierno. En el colmo del cinismo, el Fiscal General de la República tuvo unas declaraciones en las que afirmó que había necesidad de que imperara la ley, razón por la cual amenazó con intervenir en las ocupaciones ilegales. Por otro lado, un proyecto de reformas a la ley de impuestos en la exportación, si bien eran razonables no lograron más que provocar la oposición de los gremios exportadores, suscitar una serie de acusaciones contra el gobierno y la administración pública, con sus fracasos y sus fraudes, y aumentar el número de los descontentos y de los dispuestos a dar el último empujón al régimen tambaleante.

En el campo de las relaciones internacionales, el Presidente Romero cursó una invitación a la Cruz Roja Internacional para que comprobara que en el país no existen presos políticos, lo que, por un lado suscitó una serie de protestas de los comités y organismos interesados en el problema, y, por otro lado, hizo temer que se hubieran eliminado los que se encontraban en las diversas cárceles clandestinas, lo que se ha venido a confirmar a la caída del régimen. También invitó a la OEA para que supervisara las próximas elecciones, hecho que, a su vez, suscitó las protestas de los partidos de oposición y de otras entidades que argumentaban que no era ése el principal problema, sino que antes había que crear unas condiciones en las que las elecciones fueran posibles, por lo que la mayoría de ellos anunció su no participación en las mismas, dado el clima de represión y de terror que se mantenía de parte del gobierno. Mientras se enviaron observadores a La Habana, para la conferencia de los no alineados, se reunían los Presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, una vez más, para unir estrategias de represión contra el clamor popular y la amenaza de insurrección.

A tal punto llega la situación nacional, y hasta tal punto es insostenible el régimen, que la

derecha empieza a dividirse, y los elementos menos recalcitrantes inician un giro, en apoyo de alguna solución. En contra de las estrategias anteriores, organismos como FIGAPE, ASI, ANEP, Cámara de Comercio e Industria, publican una serie de pronunciamientos en los que analizan la situación, acusan al gobierno, y presionan hacia un cambio. Por el lado contrario, los grupos recalcitrantes, y el mismo gobierno, desatan una fiera campaña de calumnias y acusaciones contra personas y entidades, utilizando incluso las homilias de Mons. Aparicio y artículos del sacerdote suspendido León Montoya, dándoles intensa publicidad, y buenas remuneraciones económicas, según se ha filtrado después. Pero el sector oligárquico más importante, el agroexportador, centra su lucha en la defensa de sus intereses, y monta una campaña de ataques al gobierno por el nuevo proyecto de impuestos, sobre todo el gremio cafetalero y el algodonero que acusan abiertamente al gobierno de corrupto, y hacen recordar la batalla del 76 contra la Transformación Agraria. Hasta tal temperatura se eleva el clima nacional en este aspecto, que la Sociedad Dental denomina a los agroexportadores "capitalistas feudales", en una publicación de dicha entidad. En vísperas del Golpe, una sesión de la Cámara de Comercio se vuelve sumamente turbulenta, y muestra la división interna entre las tendencias más retrógradas y las más abiertas. Pareciera que el gobierno sólo se sostenía por las Fuerzas Armadas, ya que sus defensores tradicionales se le oponen por temor a los impuestos.

En tal ambiente, se cierne la amenaza de la condena de parte de la OEA, que pocos días después se va a reunir en La Paz. El gobierno y la ANEP destacan a sus emisarios por todo el continente, para tratar de convencer a los gobiernos de que el régimen no es represivo, ni se violan los derechos humanos, e incluyen entre las pruebas las publicaciones de las homilias de Mons. Aparicio en las que acusa a las organizaciones, a los grupos de izquierda, e incluso a la misma iglesia, de ser propiciadora del comunismo.

Se siente la presión hacia un cambio drástico de régimen, pero la derecha se encuentra dividida, y lo mismo la izquierda, que no logra un mínimo de consenso, no ya en las líneas de acción, pero ni siquiera en decisiones secundarias, como puede ser la elección del rector de la Universidad Nacional, que vuelve a fracasar a finales de septiembre por la división enconada de las or-

ganizaciones estudiantiles altamente politizadas y vinculadas orgánicamente a los movimientos y grupos nacionales. Un golpe de derechas parece estar remoto. La insurrección popular, proclamada por las organizaciones más débiles, no es secundada por el BPR, al no creer que se dan todavía las condiciones objetivas. La solución, pues, va a venir por donde menos se podía esperar en una tal conflictividad; por la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas.

El 15 de octubre alrededor de 400 oficiales jóvenes, en una acción perfectamente coordinada, se levantan contra el régimen vigente, sin disparar un solo tiro. A las ocho y treinta de la mañana detienen a todos los comandantes de los cuarteles, según llegan a presentarse, y se hacen dueños de la situación. Inmediatamente exigen al Presidente Romero la renuncia, y le dan unas horas como plazo. Hasta pasado el mediodía no se conoce que esté sucediendo nada especial en el país. En la tarde un avión guatemalteco se lleva al general Romero y a los militares que han detentado los más altos puestos en su gobierno. En la noche la noticia ya es del dominio público, se comunica que están al frente los coroneles Majano y Gutiérrez, aclarando los rumores de otros nombres de militares y civiles que habían causado la impresión de que se trataba de un autogolpe o de un golpe de derechas.

Pasada la medianoche fue emitida la Proclama de las Fuerzas Armadas, en la que se justificaba la insurrección por la incapacidad del régimen anterior, la permanente violación de los derechos humanos, la corrupción administrativa, y la implicación en todo ello de algunos elementos militares que habían llevado al desprestigio y deterioro de la institución armada. Anunciaban la constitución de una Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por esos dos coroneles y tres civiles, el respeto absoluto a los derechos humanos, la amnistía y liberación de todos los presos y desaparecidos políticos, la disolución de ORDEN, y una serie de medidas de cambios estructurales que condujeran a la creación de una sociedad más justa en beneficio del pueblo.

El primer miembro civil de la Junta, elegido por unanimidad, fue el Ing. y economista Román Mayorga Quirós, hasta ese momento Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A propuesta de éste se pidió al Foro Popular que eligiera un representante para integrar la Junta, con lo que se ampliaría la base de apoyo al nuevo régimen; la elección recayó en el Dr.

Guillermo Manuel Ungo, Secretario General del MNR, y gran figura política de la oposición. El tercer puesto civil recayó en el Ing. Mario Andino, propuesto por la Cámara de Comercio e Industria. El 17 de octubre quedó integrada la Junta Revolucionaria de Gobierno, y el día 18 ofreció una conferencia de prensa en la que el Ing. Mayorga leyó una Proclama de la Junta, ratificando y ampliando la de la Fuerza Armada.

Toda la semana se llevó la conformación del nuevo Gabinete de Gobierno, tras largas negociaciones entre las diversas fuerzas políticas que apoyaban el movimiento. El lunes 22, quedó constituido lo que se puede llamar un gobierno de unidad nacional, en el que participan representantes de un amplio espectro político y social, desde los partidos de oposición que formaron la UNO y están integrados en el Foro Popular, hasta delegados de la empresa progresista, más varios elementos no vinculados a partidos ni agrupaciones, y que poseen una trayectoria de capacidad y honestidad comprobadas. El resultado ha sido la constitución de un gabinete de lujo, como nunca se había tenido en el país, compuesto por personas de las más honestas y competentes, sin vinculación con regímenes pasados, y jóvenes en su mayoría; pero también la disparidad en criterios, tendencias y fuerzas que representan, lo que hace más difícil la coordinación de políticas y la estructuración de un plan de gobierno acorde con los principios programáticos. De hecho, la heterogeneidad del régimen se va a ver afectada por una serie de tensiones al interior del mismo, y la falta de participación en él de dos de las fuerzas sociales más importantes, la derecha oligárquica y el pueblo organizado, le va a crear una serie de dificultades que le harán muy difícil su gestión, como vamos a ver.

El movimiento insurreccional es producto de la oficialidad joven, según se puede deducir por todos los datos de que se dispone. La embajada americana fue notificada ya en vísperas del suceso; los partidos políticos y las organizaciones populares, así como el pueblo, permanecieron ignorantes del mismo incluso mientras se estaba realizando. Sin embargo, es lógico pensar que el gobierno de Estados Unidos trate de subirse al carro para evitar una orientación que dañe sus intereses y sus políticas; los partidos de oposición se movieron febrilmente para introducir en el gobierno y en la Junta sus representantes, para tratar, si no de hegemonizar, al menos de influir poderosamente; la empresa progresista logró intro-

ducir sus peones en puestos claves; y muchos particulares maniobraron para lograr puestos ventajosos en un arribismo descarado. Por su parte, las organizaciones populares tratarían de hacer abortar el proceso, o de obtener ventajas en el mismo, como logros propios. Y la derecha, en medio de la confusión inicial, se encastillaría en puestos claves que detuvieran el proceso revolucionario, utilizando a militares ajenos a tal espíritu. El contraataque se inició desde el mismo comienzo, tanto desde la derecha como desde la izquierda, contra un gobierno aún no consolidado.

La derecha logró desvirtuar el movimiento con una serie de medidas. Quedaron de alta, e incluso en puestos de gran importancia, varios coroneles que, si tal vez no estaban implicados en la dictadura derrocada, al menos estuvieron vinculados con la misma; y a pesar de que se destituyó a casi 50 altos jefes y oficiales del régimen anterior, todavía quedaron algunos, e incluso fueron ubicados en cargos trascendentales, algunos de ellos destituidos poco después de ser nombrados. Parece que se llegó a un compromiso en no juzgar a militares, aunque tuviesen cuentas pendientes en el régimen represivo anterior, y los principales de ellos salieron del país, ya sea en el primer momento, ya sea en los días sucesivos, como el general Alvarenga. El problema de los presos y desaparecidos políticos se quiso

olvidar, para comenzar una nueva época, por las implicaciones que suponía para personas a las que no se quiere juzgar. Los Cuerpos de Seguridad, como veremos después, no parecen estar controlados, y obedecen a órdenes contrarias a las del supremo gobierno. Las medidas de cambios estructurales, se van retrasando sistemáticamente, y se teme que no lleguen a implementarse, que degeneren en pequeños cambios reformistas. El capitalismo progresista, en fin, ha introducido sus peones, si bien moderados, tanto en la Junta como en el gobierno, de modo que frenen las medidas contrarias a sus intereses.

La izquierda organizada, ya sea en grupos políticos populares, ya sea en grupos militares, se vio sorprendida por la insurrección, y fiel a sus análisis y a su opción insurreccional inmediata o mediata, consideró que el golpe era contrarrevolucionario, y se opuso decididamente al mismo. El BPR se mantuvo en una actitud más pasiva, así como el FAPU. Por el contrario, las LP 28 y el ERP dediciaron la insurrección, y al día siguiente del golpe se levantaron en armas en Mejicanos y Cuscatancingo, y al otro día en San Marcos, siendo reprimidos por los Cuerpos de Seguridad y el ejército, con elevado saldo de muertos. Posteriormente corrigieron su táctica, para desmentirlo después, reanudar las acciones, y volver a cambiar, con lo que dieron una imagen de precipitación e inmadurez política.



Por su parte, el BPR llevó las acciones en otro sentido. Al día siguiente de ser juramentado el gabinete, y de ser abolido el estado de sitio y la Ley Marcial, se tomaron los Ministerios de Economía y de Trabajo y Previsión Social, con multitud de rehenes, entre los que se hallaban los ministros respectivos y los subsecretarios, así como el ministro de Planificación y los representantes de ABCEFAFE que habían acudido a presionar para impedir medidas que afectaran sus intereses; el pliego de peticiones que presentaron eran básicamente reivindicativas. El último miércoles del mes organizó un desfile bufo que terminó con una masacre de los Cuerpos de Seguridad que dejaron más de 20 muertos e infinidad de heridos. El FAPU organizó una manifestación el lunes 22, y fue disuelta violentamente por los Cuerpos de Seguridad en el boulevard del Ejército. Las LP 28 organizaron otra manifestación el lunes 29, que fue masacrada por los Cuerpos de Seguridad, con un saldo de alrededor de 70 muertos, y multitud de heridos. Al día siguiente otra manifestación suya fue reprimida frente a la embajada americana. Las madres de reos y desaparecidos políticos, a su vez, se tomaron el parque Libertad, e iniciaron una progresiva huelga de hambre, para forzar la solución de sus demandas, que estaban siendo eludidas. Entre tanto, ANDES inició las negociaciones pacíficas con el ministerio de Educación, en un ambiente de comprensión y de progreso a sus demandas. El Partido Demócrata Cristiano se apresuró a traer al país a su líder máximo, José Napoleón Duarte, organizando una gran concentración de gente, que del aeropuerto se dirigió al parque Libertad, donde fue agredida y disuelta por otros grupos organizados y por oportunistas o malintencionados e infiltrados, que después se dedicaron al saqueo de comercios. Muchas iglesias de la capital y del interior fueron tomadas por las diversas organizaciones populares.

Los grupos guerrilleros, a su vez, tuvieron una serie de acciones militares. El ERP detonó bombas en el Banco de América, y en los edificios de la Prensa Gráfica y del Diario de Hoy, con grandes daños físicos. También dieron muerte al teniente Castillo, acusado de ser uno de los principales torturadores de la Guardia Nacional, y al que parece ser que trataron de tomar vivo. Las FPL tendieron una emboscada a la Guardia, cerca de Zacatecoluca, dando muerte a seis de ellos, y dejando a otro herido.

Por su parte, los Cuerpos de Seguridad actuaron con más violencia y saña que en períodos similares del régimen anterior. Al día siguiente del golpe desalojaron varias fábricas tomadas, con un saldo de varios muertos. Este hecho, al parecer inconsulto, motivó la destitución de los jefes implicados, al día siguiente de su mismo nombramiento. La represión salvaje de las manifestaciones populares, ya indicadas, con un saldo de más de cien muertos en los quince primeros días del nuevo régimen, y centenares de heridos, denota que los Cuerpos de Seguridad, no sólo no han cambiado de actitud y de métodos, sino que no obedecen a los nuevos lineamientos políticos de la juventud militar, de la Junta y del nuevo gobierno, y que más bien se comportan de modo insubordinado, respondiendo a mandos que no están de acuerdo con el nuevo régimen, y que pretenden crearle problemas que conduzcan a un contragolpe de derechas.

Estos primeros quince días, que han sido absorbidos por la reorganización del Estado y por la solución de las conflictividades que han explotado, no nos pueden dar todavía suficientes datos como para un juicio del nuevo gobierno, aunque a partir de los análisis teóricos se pueden predecir sus limitaciones y su comportamiento. La solución de los problemas que afronta dará la pauta para un análisis más a fondo. De momento, sólo podemos apuntar los problemas más graves que se le plantean.

Tal vez el problema más agudo del actual gobierno sea el control de las FF. AA., y su sometimiento a las nuevas políticas. Aunque en el ejército está la base del cambio, todavía han quedado enquistados algunos elementos que pueden boicotear el proceso. Pero los Cuerpos de Seguridad ciertamente se escapan a los nuevos lineamientos, y constituyen una permanente amenaza. El poder militar, por lo tanto, no está unificado.

Otro problema agudo es el de los reos y desaparecidos políticos, que parece que fueron eliminados antes de la caída del régimen anterior. Pero los intereses de ciertas personas que aún detentan poder se oponen a una clarificación de los hechos que conduzca a una deducción de responsabilidades, y al enjuiciamiento de los culpables.

El tercer problema serio es el de las organizaciones populares, para las que hay que encontrar un tipo de relaciones y un campo de acción que ayude al proceso de cambio que el país necesita.

La iglesia católica en El Salvador es una fuerza social considerable. En el régimen pasado la división de la iglesia y de la jerarquía ayudó al gobierno en su política corrupta y represiva. Sólo dos obispos eran considerados como opositores al sistema, mientras que los demás, junto con el Nuncio, servían de apoyo tácito o explícito al gobierno. En el presente régimen, tanto Mons. Romero como Mons. Rivera Damas han dado un apoyo condicionado al gobierno, con la esperanza de que las promesas se conviertan en realidades, y se eviten los graves fallos en las represiones que después del golpe se han incrementado. Los demás obispos han optado por el silencio.

En general, se puede decir que en los primeros momentos, el gobierno actual ha fallado en el manejo de la publicidad y de los medios de comunicación, manteniendo al pueblo en una gran ignorancia de lo que está pasando y de sus proyectos.

Las reformas estructurales que se han prometido, siguen sin pasar a los hechos, con lo que no se ha podido medir el poder de la oligarquía, que entre tanto se estará rearticulando y consolidando, lista para promover o secundar un contragolpe, a una con los militares retirados de sus puestos. Cada día que pase en la aplicación de tales medidas se encontrará con mayores dificultades, y hará perder credibilidad al nuevo régimen.

De la solución que se dé a estos problemas, y a todos los demás que se presenten, va a depender que la base que sustenta al gobierno se amplíe o no, que el régimen se consolide o se debilite aún más, y de que se avance o no hacia una verdadera revolución como la Junta dice pretender. En caso de no avanzar en esta línea de solución estructural a los angustiosos problemas que afligen al país, éste será otro intento fallido de encontrar una solución pacífica.

EUGENIO C. ANAYA, h.

